

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CUARENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020)

EXPEDIENTE N°: 110013342-046-2020-00089-00
ACCIONANTE: SANDRA CAROLINA ROJAS RUIZ
ACCIONADO: NACIÓN –PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
VINCULADOS: MINISTERIO DE HACIENDA

ACCION DE TUTELA

1. De la admisión de la demanda

Se examina la presente acción de tutela presentada por la señora SANDRA CAROLINA ROJAS RUIZ, actuando a nombre propio, contra la NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ALCALDÍA DE BOGOTÁ, por medio del cual solicita la protección de sus derechos de orden constitucional y fundamental a la vida, trabajo e igualdad, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas al no proporcionarle los apoyos económicos que está brindando el Gobierno ante la difícil situación que se presenta en el país con el COVID-19.

De conformidad con el Decreto 1983 de 2017¹, que modifica las reglas para el reparto de la acción de tutela, este Despacho tiene competencia para conocer y tramitar la presente acción.

En este orden de ideas, comoquiera que la presente acción alcanza a satisfacer los demás requisitos básicos previstos en el artículo 14 del Decreto ley 2591 de 1991,

¹ “Artículo 1. *Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015.* Modifícase el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:

Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeron sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría. (...)

procederá su admisión y se ordenará notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito y eficaz.

Por otra parte, conforme a lo solicitado por la parte actora en su escrito de demanda, considera este Despacho necesario vincular al presente asunto al Ministerio De Hacienda, al considerar que puede tener interés en las resultas del presente proceso.

Por tanto, se requerirá a las entidades accionadas para rendir el informe necesario para el esclarecimiento de los hechos narrados por la accionante y allegar la documentación que repose en sus archivos, relacionada con los mismos.

2. De la medida provisional

La tutelante solicita se disponga como medida provisional, se ordene a las entidades accionadas procedan con la entrega inmediata de los apoyos y ayudas humanitarias que el Estado estén brindando *“antes que los dineros destinados continúen siendo dilapidados por los presuntos actos de corrupción”*. Esto en atención que con ocasión de la cuarentena adoptada por el COVID- 19 y la imposibilidad que ello genera en la accionante para poder trabajar, corre la subsistencia de ella y de su familia un riesgo inminente.

Al respecto el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 explicó:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.”

Ahora bien, la H. Corte Constitucional ha señalado que procede el decreto de medidas provisionales frente a las siguientes hipótesis: **(i)** cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o, **(ii)** cuando se constate la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación².

En principio, las medidas provisionales se dirigen a la protección del derecho del accionante, mediante la suspensión del acto específico de autoridad pública, administrativa o judicial - o particular, en determinados casos -, que amenace o vulnere su derecho (inciso 1º del artículo transcrito). Sin embargo, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, se encuentra habilitado el juez para dictar “*cualquier medida de conservación o seguridad*” dirigida, tanto a la protección del derecho como a “*evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados...*” (inciso final del artículo transcrito). También las medidas proceden, de oficio, en todo caso, “... *para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante*”, estando el juez facultado para “*ordenar lo que considere procedente*” con arreglo a este fin (inciso 2º del artículo transcrito).

En el *sub lite*, de las pruebas allegadas al expediente no se logra determinar de manera cierta, y concreta las circunstancias que ameriten una protección especial o la intervención del juez constitucional desde este momento del trámite de la presente acción, siendo necesario señalar que para la decisión del presente asunto se requiere del estudio de las pruebas que en el curso del mismo se presenten, razón por la que no se considera procedente la medida aquí solicitada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que al buscar la accionante la entrega de ayudas económicas que el Gobierno está proporcionando a las personas afectadas con las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, son circunstancias propias que se determinaran al momento de evaluar las respuestas que otorguen las entidades accionadas y con esto verificar si la actora puede acceder a los beneficios humanitarios que se estén brindando.

² Auto 1285 de 2013

Además, nótese que de las referidas pruebas aportadas no se logra evidenciar la presencia de alguna de las hipótesis que hacen procedente la medida provisional, esto es, evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o, que se constate la ocurrencia de una violación, y sea imperioso precaver su agravación³. Lo anterior, sin perjuicio que en desarrollo del trámite tal evidencia surja del análisis de nuevas pruebas aportadas.

Así las cosas, en el presente caso el Despacho no encuentra razones urgentes y necesarias para ordenar la suspensión solicitada como medida provisional.

Finalmente, el Despacho, no vinculará la Procuraduría General de la Nación, toda vez que dicha entidad no es la directa responsable de otorgar los beneficios que solicita la tutelante en la presente tutela.

En consecuencia, se

RESUELVE

PRIMERO. Admítase la acción de tutela instaurada por la SANDRA CAROLINA ROJAS RUIZ, actuando a nombre propio, contra la NACIÓN –PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ALCALDÍA DE BOGOTÁ, por la presunta violación de los derechos fundamentales de orden constitucional y fundamental a la vida, trabajo e igualdad.

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de medida provisional presentada por la accionante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: VINCULAR al proceso al Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

CUARTO. Por secretaría, a través del medio más eficaz, notifíquese la decisión adoptada mediante esta providencia a la Presidencia de la República (Departamento Administrativo para la Presidencia de la República), la alcaldesa de Bogotá, al Ministro de Hacienda, y/o a quienes hagan sus veces, para que en el término de dos (2) días se pronuncien acerca de la presente acción.

³ Auto 1285 de 2013

De otra parte, se les solicita indiquen a este Despacho los beneficios que están otorgando a las personas afectadas con las medidas que el Gobierno ha Decretado con ocasión al COVID-19, así como el procedimiento que se debe seguir para poder acceder a los mismos.

En igual sentido, manifiesten si la accionante ha sido beneficiaria de alguna ayuda humanitaria ante la pandemia que se está presentando en el país.

Finalmente, informen si la accionante ha presentado acción de tutela por los mismos hechos, con anterioridad.

QUINTO. - Por secretaría, a través del medio más eficaz, notifíquese a la tutelante sobre la admisión de la demanda.

SEXTO. Comuníquese a los señores Defensor del Pueblo y al correspondiente agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho sobre la admisión de la presente acción de tutela.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN ALONSO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Juez